



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

- Que** el Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, define al Ecuador como: “un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. (...);
- Que** el número 5 del Artículo 11 de la Constitución dispone: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (...) 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. (...)” ;
- Que** el Artículo 53 de la Constitución, establece que: “Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.”;
- Que** el inciso primero del Artículo 54 de la Constitución, señala: “Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. (...)”;
- Que** el número 25 del Artículo 66 de la Constitución, recoge el derecho de las personas a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como, a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características;



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

- Que** el Artículo 82 de la Constitución, garantiza el derecho a la seguridad jurídica, la misma que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes;
- Que** el Artículo 226 de la Constitución, señala que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;
- Que** el Artículo 227 de la Constitución dispone que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;
- Que** de acuerdo con el Artículo 238 de la Constitución: “los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera”;
- Que** el Artículo 240 de la Constitución determina que: “Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. (...)”;
- Que** el Artículo 254 de la Constitución, establece que “Cada distrito metropolitano autónomo tendrá un concejo elegido por votación popular. La alcaldesa o alcalde metropolitano será su máxima autoridad administrativa y presidirá el concejo con voto dirimente. Los distritos metropolitanos autónomos establecerán regímenes que permitan su funcionamiento descentralizado o desconcentrado.”;
- Que** el Artículo 260 de la Constitución señala que: el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno;



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

- Que** el Artículo 266 de la Constitución prevé que: “Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias. - En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas distritales”;
- Que** el Artículo 313 de la Constitución establece que se, consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley;
- Que** de conformidad con el Artículo 314 de la Constitución, en concordancia con el segundo inciso del Artículo 34 del Código Orgánico Administrativo (COA), además de los calificados como tales en la ley, se consideran servicios públicos los de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias;
- Que** el Artículo 315 de la Constitución señala que: “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado. La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos”;



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

- Que** el Artículo 316 de la Constitución prevé que: “El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. - El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”;
- Que** el Código Orgánico Administrativo en su ámbito material regula la relación jurídico administrativa entre las personas y las administraciones públicas, así como la actividad jurídica de las administraciones públicas;
- Que** el Artículo 74 del COA establece: “Excepcionalidad. Cuando sea necesario, en forma excepcional y motivada para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas con mayoría pública, el Estado o sus instituciones podrán delegar a sujetos de derecho privado, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos, sin perjuicio de las normas previstas en la ley respectiva del sector. La delegación de actividades económicas que no correspondan a servicios públicos o sectores estratégicos, esto es, aquellas que no se encuentren reservadas constitucional o legalmente al Estado, no está sujeta al criterio de excepcionalidad previsto en el inciso precedente, sino a los criterios de eficiencia y eficacia administrativas (...).”;
- Que** el Artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que, se entiende por autonomía administrativa: “el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley”;
- Que** el primer inciso del Artículo 7 del Cootad prevé que: “Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial”;

- Que** el Artículo 29 del Cootad establece que, para el ejercicio de cada Gobierno Autónomo Descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas: a) De legislación, normatividad y fiscalización; b) De ejecución y administración; y, c) De participación ciudadana y control social;
- Que** el Artículo 84, letras m) y o) del Cootad, manifiesta: (...) “m) Regular y controlar el uso del espacio público metropolitano, y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización”; y, o) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial metropolitana con el objeto de precautelar el desarrollo ordenado de las mismas;”;
- Que** el Artículo 85 del Cootad señala que: “Los gobiernos autónomos descentralizados de los distritos metropolitanos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que puedan ser asumidas de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que se les asigne”;
- Que** el primer inciso del Artículo 86 del Cootad prevé que: “El concejo metropolitano es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado del distrito metropolitano. Estará integrado por los concejales o concejalas elegidos por votación popular de conformidad con previsto en la Ley de la materia electoral. El alcalde o alcaldesa metropolitana lo presidirá con voto dirimente”;
- Que** el Artículo 87 letras a), b), i) y s) del Cootad señala entre las atribuciones del Concejo Metropolitano, las siguientes: “a) Ejercer la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado metropolitano, mediante la expedición de ordenanzas metropolitanas, acuerdos y resoluciones; b) Regular, mediante ordenanza metropolitana, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; (...) i) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas distritales, según las disposiciones de la Constitución, la ley y el estatuto de



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

autonomía. La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales; (...) s) Conocer y resolver los asuntos que sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa metropolitana”;

- Que** el Artículo 90 del Cootad establece entre las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa Metropolitano lo siguiente: “g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan metropolitano de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes obras públicas; e i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir previo conocimiento del concejo la estructura orgánico funcional del gobierno distrital metropolitano autónomo descentralizado (...).”;
- Que** el segundo inciso del Artículo 186 del Cootad, establece que: “cuando por decisión del gobierno metropolitano o municipal, la prestación de un servicio público exija el cobro de una prestación patrimonial al usuario, cualquiera sea el modelo de gestión o el prestador del servicio público, esta prestación patrimonial será fijada, modificada o suprimida mediante ordenanza”;
- Que** el Artículo 219 del Cootad establece que: “Inversión social. - Los recursos destinados a educación, salud, seguridad, protección ambiental y otros de carácter social serán considerados como gastos de inversión. Cuando los recursos estén destinados para educación y salud, se deberá cumplir con los requisitos determinados por la Constitución y la ley.” (énfasis añadido);
- Que** de conformidad con los artículos 274 y siguientes del Cootad, los Gobiernos Autónomos Descentralizados pueden prestar los servicios y ejecutar las obras que son de su competencia mediante gestión directa o gestión delegada;
- Que** conforme los artículos 279 y siguientes del Cootad la gestión delegada comprende la delegación a otros niveles de gobierno, la gestión compartida entre diversos gobiernos autónomos descentralizados, la cogestión de los gobiernos descentralizados autónomos con la comunidad, la gestión a través de empresas de economía mixta y la delegación a la economía social y solidaria y a la iniciativa privada;



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

- Que** el Artículo 283 del Cootad establece que: “(...) Solo de manera excepcional los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, podrán delegar la prestación de servicios públicos de su competencia a la iniciativa privada, esta delegación se realizará mediante acto normativo del órgano competente cuando el gobierno autónomo descentralizado respectivo no se encuentre en capacidad técnica y económica de gestionar directamente un servicio público, o en caso de calamidad pública o desastre natural. La falta de capacidad técnica o económica para la gestión directa de un servicio público será debidamente justificada por la autoridad ejecutiva, ante el respectivo órgano legislativo local y la ciudadanía, en las condiciones establecidas en la Constitución, la ley y de acuerdo con las regulaciones del órgano competente de la administración pública o gobierno central que tenga atribución legal en materia de competencias. La selección correspondiente deberá realizarse mediante concurso público con excepción de la delegación de las competencias de riego, agua potable y alcantarillado a organizaciones comunitarias”;
- Que** el primer inciso del Artículo 322 del Cootad establece que, los consejos regionales y provinciales y los concejos metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros;
- Que** el Artículo 326 Cootad determina que “Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, conformarán comisiones de trabajo las que emitirán conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como base para la discusión y aprobación de sus decisiones.”;
- Que** la Ley Orgánica de Empresas Públicas, conforme lo previsto en el Artículo 35, reconoce la capacidad asociativa de las empresas públicas, para el cumplimiento de fines y objetivos empresariales. En concordancia, el Artículo 34 de la LOEP prevé que: “[...] 3. RÉGIMEN ESPECIAL. - En los casos en que las empresas públicas hubieren suscrito contratos o convenios tales como: alianzas estratégicas, asociación, consorcios u otros de naturaleza similar, será el convenio asociativo o contrato el que establezca los procedimientos de contratación y su normativa aplicable. En el caso de empresas constituidas con empresas de la comunidad internacional las contrataciones de bienes, obras y servicios se sujetarán al régimen especial que se



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

contemple en el documento de asociación o acuerdo celebrado para tal efecto. En lo no previsto en el respectivo convenio o contrato, se estará a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. [...]”;

Que el Artículo citado fue interpretado por la Corte Constitucional para el Período de Transición, a través de la Sentencia Interpretativa No. 001-12-SIC-CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 629 de 20 de enero de 2021. En dicha sentencia, la Corte Constitucional, observa: “[...] Debe entenderse que las empresas públicas únicamente gozan de la facultad de gestionar los sectores estratégicos y/o prestar los servicios públicos, para los que hubieren sido autorizadas, sin que les esté permitido a su vez, a dichas empresas públicas, delegar a la iniciativa privada la gestión de los sectores estratégicos y/o la prestación de los servicios públicos, lo cual es competencia de los organismos pertinentes conforme lo establecido en la ley. [...]”;

Que el Artículo 36 de la LOEP prevé que: “[...] Para ampliar sus actividades, acceder a tecnologías avanzadas y alcanzar las metas de productividad y eficiencia en todos los ámbitos de sus actividades, las empresas públicas gozarán de capacidad asociativa, entendida esta como la facultad empresarial para asociarse en consorcios, alianzas estratégicas, conformar empresas de economía mixta en asocio con empresas privadas o públicas, nacionales o extranjeras, constituir subsidiarias, adquirir acciones y/o participaciones en empresas nacionales y extranjeras y en general optar por cualquier otra figura asociativa que se considere pertinente conforme con lo dispuesto en los artículos 315 y 316 de la Constitución de la República.[...] En general los acuerdos asociativos e inversiones previstas en el inciso anterior deberán ser aprobados mediante resolución del Directorio en función de los justificativos técnicos, económicos y empresariales presentados mediante informe motivado y no requerirán de otros requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el Directorio para perfeccionar la asociación o inversiones, respectivamente. [...]”;

Que en el Libro II, de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 461, de 20 de diciembre de 2023, se normó la “*Creación del régimen para la atracción de inversiones, a través de las asociaciones público-privadas*” (en adelante Ley APP), que sustituyó las regulaciones en la materia contenidas en la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

la Inversión Extranjera, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 652, de 18 de diciembre de 2015;

- Que** el Artículo 1 del Libro II, de la Ley APP determina que este cuerpo normativo es “obligatorio para las entidades, organismos e instituciones del sector público, conforme el artículo 225 de la Constitución de la República; así como, también para el sector privado o de la economía popular y solidaria que se asocie con el Estado, a través de la modalidad de asociación público-privada que regula esta Ley”;
- Que** el segundo inciso del Artículo 2 de la Ley APP determina que: “Esta modalidad exige para su aplicación un Análisis de Conveniencia previo con la finalidad de evaluar comparativamente las opciones de contratación para determinar la mejor alternativa contractual a favor del Estado y podrá aplicarse únicamente en aquellos proyectos públicos que cumplan con los procedimientos establecidos en esta Ley, y que superen el valor total de inversión mínimo que defina su Reglamento. Los proyectos públicos que no superen dicho monto podrán ejecutarse a través de Contratación Pública Ordinaria, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin perjuicio de la aplicación de otras modalidades contractuales de conformidad con el ordenamiento jurídico tales como los mecanismos asociativos determinados en los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, independientemente del monto de inversión (...).”;
- Que** el Artículo 29 del Libro II, de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo APP señala que: “Le corresponde a cada Gobierno Autónomo Descentralizado, en ejercicio de su autonomía y las competencias que tienen atribuidas en la Constitución y la Ley, efectuar los arreglos institucionales para el ejercicio de sus atribuciones como entidad Delegante, para cumplir con el ciclo del proyecto APP, que deberá observar lo previsto en esta Ley, su Reglamento y Guías del CIAPP. En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados la aprobación de uso de la modalidad corresponderá al órgano legislativo de los GAD. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán determinar en su estructura administrativa los órganos a cargo de los estudios, revisión de documentos, elaboración de informes, autorizaciones y aprobaciones previstas en esta Ley, para cada una de las fases del ciclo del proyecto, salvo en los casos en que, de conformidad con la Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

Públicas y esta Ley deban obtener dictámenes o alcanzar las aprobaciones de los órganos y entidades de la Administración Pública Central de conformidad con esta Ley.”;

- Que** mediante Decreto Ejecutivo Nro. 157, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 496, de 9 de febrero de 2024, se expidió el Reglamento General de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, cuyo Libro III, contiene el Régimen para la atracción de inversiones público-privadas;
- Que** el Artículo 223 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo prevé que: "En los términos de la Ley APP, la ASOCIACIÓN Público-Privada ("APP"), es una modalidad contractual de gestión delegada de largo plazo entre una Entidad Delegante y un Gestor Privado, en la que se incorpora la experiencia, conocimientos, equipos, tecnologías y capacidades técnicas y financieras del sector privado, con el fin de diseñar, financiar, construir, mejorar, operar y mantener un activo público nuevo o existente, y/o proveer el mantenimiento, administración, suministro, gestión o prestación de un Servicio Público. El Contrato podrá incluir todas o algunas de las actividades señaladas anteriormente. En una APP se distribuyen riesgos entre las partes y se asignan riesgos significativos al Gestor Privado, conforme con el Perfil de riesgos del proyecto. La contraprestación del Gestor Privado está ligada al desempeño, cumplimiento de los Niveles de Servicio y/o disponibilidad del activo bajo los estándares de calidad y eficiencia establecidos en el Contrato”;
- Que** el Artículo 254 del Reglamento a Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo APP dispone: “Organización institucional de las Entidades Delegantes que no pertenezcan a la Administración Pública Central.- Todas las Entidades Delegantes que no pertenezcan a la Administración Pública Central, en el ejercicio de su autonomía y de las competencias que le son atribuidas por ley, son responsables de establecer los arreglos institucionales necesarios o de asignar las competencias internas para ejercer su rol de Entidad Elegante en Proyectos APP, en el marco de la Ley APP”;
- Que** el Artículo 4 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito (en adelante Código Municipal) señala que: “Para el pleno ejercicio de sus competencias



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

y de las facultades que de manera concurrente puede asumir, se reconoce al Concejo Metropolitano de Quito, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de la circunscripción territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito”;

- Que** el Artículo 67.48 del Código Municipal señala que: “Tal como lo establecen los incisos finales de los artículos 264 y 266 de la Constitución de la República, la facultad legislativa del Concejo Metropolitano de Quito se expresa a través de ordenanzas”;
- Que** el Artículo 67.49 del Código Municipal prevé que: “Las ordenanzas son los actos normativos expedidos por el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, con efectos jurídicos en los ciudadanos que viven o transitan por la circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de Quito, en temas que revisten interés general y cuya aplicación es de carácter obligatorio”;
- Que** el Artículo 3060 del Código Municipal determina: “Objetivos.- Créase el Sistema de Estacionamientos de Quito con el objetivo de apoyar el desarrollo territorial, la conectividad y movilidad dentro del Distrito Metropolitano de Quito, así como mejorar las condiciones de circulación peatonal, vehicular y ciclística, principalmente en la ciudad de Quito y sus conglomerados adyacentes, mediante la planificación, diseño y gestión de estacionamientos vehiculares existentes y nuevos proyectos, que integren de forma prioritaria sus servicios a los principales corredores de transporte público de pasajeros.”;
- Que** el inciso primero del Artículo 3062 del Código Municipal establece: “Sistema de Estacionamientos.- Los estacionamientos vehiculares que conforman el Sistema de Estacionamientos de Quito tendrán el carácter de uso público y serán planificados, diseñados y gestionados tanto en bienes sobre los cuales tiene dominio la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, como en bienes inmuebles de dominio público, y en los bienes de dominio privado que hayan sido debidamente autorizados para este fin, se aplicará las regulaciones del uso del suelo comercial y de servicios del Distrito Metropolitano de Quito.”;



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

- Que** el Artículo 3064 del Código Municipal, dispone: “Administración.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través del órgano administrativo competente, administrará el Sistema de Estacionamientos de Quito, con facultades y competencias en la materia de conformidad con este Título, para lo cual diseñará, gestionará y ejecutará todas las acciones necesarias para promover y desarrollar el mismo, en el marco de las políticas de movilidad sostenible definidas por el Concejo Metropolitano o por la Secretaría o dependencia responsable de la Movilidad, según corresponda.”;
- Que** el Artículo 3071 del Código Municipal determina: “Administración.- Los Estacionamientos de uso público y Terminales Terrestres que se encuentren ubicados en bienes sobre los cuales tiene dominio la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, serán administrados y operados por el órgano competente de la administración del Sistema de Estacionamientos de Quito, bajo el régimen de concesión, asociación o cualquier otro tipo de acto necesario para organizar, promover, contratar y operar el Sistema, exceptuándose aquellos actos que pudieran implicar transferencia de dominio de los bienes, para lo cual se requerirá autorización expresa del Concejo Metropolitano. Los parqueaderos de los Mercados, Ferias y Plataformas de propiedad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, no forman parte del presente Título y se administrarán de conformidad con lo establecido en el Título relacionado con los mercados del Libro de la Comercialización, de este Código. Los estacionamientos de uso público ubicados en bienes privados que cobren tarifa por el uso de plazas de estacionamiento, deberán cumplir con la normativa que para el efecto dicte la Secretaría o dependencia de la movilidad, en base a los informes técnicos presentados por el órgano competente de la administración del Sistema y la Secretaría responsable del territorio, hábitat y vivienda.”;
- Que** el número 12 del Artículo 8 de la Ley para el Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito señala que, le corresponde especialmente, al Concejo Metropolitano: “Resolver sobre la constitución de empresas públicas, la concesión de servicios públicos al sector privado y la participación en otras empresas con el capital privado para la prestación de servicios, la ejecución o mantenimiento de obras y, en general, para las actividades económicas susceptibles de ejecutarse empresarialmente (...)”;



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

- Que** el Artículo 15 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, respecto a la desconcentración, determina que en cuanto contribuya a obtener niveles más altos de eficacia en el cumplimiento de sus fines, la administración distrital procurará desconcentrar el ejercicio de funciones que corresponden a la administración distrital. Para el efecto, el Concejo y el Alcalde adoptarán las medidas necesarias en sus respectivas esferas de competencia;
- Que** a través del oficio Nro. 10100 de 09 de octubre de 2012, la Procuraduría General del Estado, en ejercicio de su función consultiva, se pronunció sobre la capacidad asociativa de las empresas públicas, conforme lo siguiente: “[...] toda vez que los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas reconocen la capacidad asociativa de estas entidades de derecho público, se concluye que procede que la Empresa Pública (...) seleccione a un socio privado, previo concurso público para la conformación de una asociación para ejecutar un proyecto [...] con relación (sic) la selección del socio y los acuerdos de asociación de las empresas públicas, no son aplicables los procedimientos (sic) previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ya que conforme el inciso tercero del artículo 36 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, los acuerdos asociativos e inversiones deberán ser aprobados mediante resolución del Directorio, en función de los justificativos técnicos, económicos y empresariales, presentados mediante informe motivado y no requerirán de otros requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el Directorio para perfeccionar la asociación o inversiones, respectivamente. [...] La conveniencia de constituir una asociación, alianza estratégica o una sociedad de economía mixta y, en general, de escoger una forma asociativa, así como de establecer los requisitos y procedimientos para seleccionar un socio privado, son de competencia del Directorio de la Empresa Pública [...]”;
- Que** con el Oficio Nro. 01796 de 20 de junio de 2018, la Procuraduría General del Estado señaló que: “[...] la aprobación de pliegos y especificaciones técnicas o bases del proceso de selección de socio estratégico para un proceso de alianza estratégica, así como los criterios para seleccionar al socio y adjudicar dicho proceso, deben ser reglados por el Directorio de la respectiva empresa pública, previo a su aplicación por parte del Gerente General [...]”;



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

En ejercicio de las competencias conferidas en los artículos 240, 260, 264 y 266 de la Constitución de la República del Ecuador; 87 letras a) y b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 8 número 12) de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito expide la siguiente:

ORDENANZA METROPOLITANA REFORMATORIA DEL LIBRO I.2 DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, QUE CREA EL TÍTULO XII: ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DELEGADA

ARTÍCULO ÚNICO. - En el Libro I.2 “De la Organización Administrativa” del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, luego del Título XI agregase el siguiente:

TÍTULO XII ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DELEGADA

Artículo 318.1.- Objeto.- El Objeto del presente Título es regular la implementación de las Asociaciones Público-Privadas (APP) entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito y un gestor privado; y, la participación del Concejo Metropolitano, de conformidad con el ciclo general de proyecto y demás previsiones del Libro II de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, en el que se crea el Régimen para la Atracción de Inversiones, a través de las Asociaciones Público - Privadas (en adelante “Ley APP”), su Reglamento y las Guías expedidas por el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas (en adelante “CIAPP”).

Artículo 318.2.- Del alcance.- El alcance del presente Título comprende a los proyectos en asociación público-privada (APP), definida como una modalidad contractual de Gestión Delegada de largo plazo entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito y un Gestor Privado, para el desarrollo y/o gestión de un activo público o la prestación de un servicio público en el cual el Gestor Privado asume riesgos y responsabilidades significativos durante la vigencia del contrato y, la contraprestación está ligada al desempeño respecto del nivel de servicio y disponibilidad de la infraestructura existente o nueva, conforme lo disponen la Ley APP y su Reglamento.



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

Artículo 318.3.- Del ciclo de los proyectos APP. - De conformidad con lo establecido en la Ley APP y su Reglamento, las fases del ciclo general de los proyectos son:

1. Fase de planificación y elegibilidad;
2. Fase de estructuración del proyecto;
3. Fase de concurso público; y,
4. Fase de ejecución y gestión del contrato.

Los proyectos APP deberán cumplir con la totalidad del ciclo y contar con la debida aprobación del Concejo Metropolitano de Quito, en los momentos procedimentales que se establecen en este Título.

Artículo 318.4.- De los arreglos institucionales como entidad delegante. - La entidad delegante, que ejercerá las atribuciones establecidas en la Ley APP y demás normativa nacional aplicable es el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. Para este fin, el Alcalde o Alcaldesa, de conformidad con lo previsto en el Artículo 90, letras g) e i) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, mediante resolución administrativa, determinará la secretaría metropolitana sectorial y la empresa pública metropolitana que ejecutarán las acciones correspondientes a las fases del ciclo general de proyectos establecidas en la Ley APP y su Reglamento, según corresponda en razón de la especialidad de cada proyecto APP.

Los instrumentos relativos a riesgos fiscales serán elaborados por la dependencia competente de la Administración General.

Artículo 318.5.- De la declaratoria de interés público. - Las iniciativas privadas que resulten elegibles para la modalidad de gestión delegada serán puestas a consideración del Concejo Metropolitano de Quito para su correspondiente declaración de interés público, de conformidad con la Ley APP y su Reglamento para posterior solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones Público-Privadas por parte del ejecutivo. La declaratoria se realizará a través de una resolución en un solo debate que para su aprobación requerirá de mayoría simple.



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

Artículo 318.6.- De las iniciativas públicas. - El Concejo Metropolitano conocerá de las iniciativas públicas previo la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones Público-Privadas por parte del ejecutivo.

Artículo 318.7.- De la estructuración técnica, económica, financiera y legal de los proyectos APP .- Dada su especialidad y complejidad, para la estructuración técnica, económica, financiera y legal de los proyectos APP, la secretaría metropolitana sectorial y la empresa pública metropolitana a cargo de un proyecto APP, podrán contratar conforme establece la Ley APP, el soporte y la asesoría profesional especializada, nacional o internacional, de manera que los estudios, informes, análisis y evaluaciones que se requiera cuenten con los más altos estándares, precautelando el interés público.

Artículo 318.8.- De la aprobación de la modalidad de gestión delegada.- Una vez que se dé cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley APP, su Reglamento y Guías para la fase de estructuración de un proyecto, el Alcalde o Alcaldesa pondrá a consideración del Concejo Metropolitano de Quito el proyecto APP para que resuelva la correspondiente aprobación de la modalidad de gestión delegada, el inicio del concurso público respectivo y la definición del porcentaje de bonificación al proponente privado. La aprobación del Concejo Metropolitano de Quito se realizará a través de una resolución en un solo debate que para su aprobación requerirá de mayoría simple.

Artículo 318.9.- De las otras atribuciones del Concejo Metropolitano de Quito. - Sin perjuicio de lo definido en este Título, le corresponde al Concejo Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito, ejercer todas las demás atribuciones que se encuentran determinadas en el Ordenamiento Jurídico vigente aplicables al ámbito de cada proyecto de asociación público privada.

DISPOSICIONES REFORMATARIAS

PRIMERA. - Sustitúyese el Artículo 3073 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito por el siguiente texto:

“Art. 3073.- Responsabilidad. - La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, a través del órgano administrativo competente del Sistema de Estacionamientos de Quito, responderá civilmente ante daños o pérdidas ocasionadas en los vehículos que permanezcan en los estacionamientos del Sistema; salvo en



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

aquellos casos en que se evidencie por parte del usuario, descuido, negligencia o incumplimiento de las normas o condiciones de uso que regula los estacionamientos.

Los Estacionamientos que forman parte del Sistema de Estacionamientos Privados del Distrito Metropolitano de Quito serán responsables civilmente, ante los riesgos inherentes al servicio de estacionamiento.”

SEGUNDA. - Sustitúyese el Artículo 3092 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito por el siguiente texto:

“**Artículo 3092.-** Estacionamientos de uso público por iniciativa privada.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito o el órgano administrativo competente del sistema de estacionamientos de Quito, podrá autorizar el desarrollo de proyectos de estacionamientos bajo la superficie en bienes sobre los cuales tiene dominio el Municipio, tales como calles, plazas, parques, avenidas, pasajes y ejidos, ya sea por modalidad de proyectos APP o mecanismos asociativos a través de la empresa metropolitana pública correspondiente, de conformidad con el Ordenamiento Jurídico Nacional y Metropolitano. En cualquier caso, se deberá cumplir las siguientes condiciones:

- a) Que el proyecto sea consistente con el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el Plan de Uso de Suelo y con la Política de Gestión de Estacionamientos establecida en este Título.
- b) Que el proyecto incorpore, dentro de su diseño técnico, arquitectónico, económico y financiero, las medidas orientadas a mitigar todos los impactos que genere el mismo en función de las Normas Técnicas Municipales vigentes.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas expida la guía técnica para determinar el límite de compromisos firmes y contingentes en el total de los contratos de asociaciones público-privadas, se observará el límite previsto en el quinto artículo innumerado a continuación del artículo 91 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, correspondiente al 35% del presupuesto de inversión del



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito incluidas las empresas públicas y entidades adscritas.

SEGUNDA: Dentro del plazo de dos (2) meses a partir de la fecha de sanción de la presente Ordenanza Reformativa, el Órgano competente de la administración del Sistema de Estacionamientos de Quito, mediante Resolución Administrativa, expedirá las instrucciones operativas, flujos de procedimiento y reglas técnicas para la mejor aplicación de esta Ordenanza Reformativa, es decir, queda facultada para expedir las reglas de carácter financiero, operativo y técnico, que incluyen los límites de cobertura, en cada una de las tipologías de la oferta de estacionamientos, previo informe favorable emitido por la Secretaría o dependencia responsable de la Movilidad.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. - Encárgase a la Secretaría General del Concejo Metropolitano la publicación de esta Ordenanza en la Gaceta Municipal.

SEGUNDA. - Encárgase a la Secretaría General del Concejo Metropolitano la notificación de esta Ordenanza a las autoridades de las dependencias, entidades, agencias, unidades ejecutoras y empresas públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.

TERCERA. - La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de la sanción por parte del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito.

Dada, en la ciudad Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, a los quince días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

Dra. Libia Rivas Ordóñez
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO



ORDENANZA METROPOLITANA No. 083-2024

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

En mi calidad de Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifico que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito, en dos debates, correspondientes a las sesiones: No. 081 ordinaria de 27 de agosto de 2024 (primer debate); y, No. 090 ordinaria de 15 de octubre de 2024 (segundo debate).

Dra. Libia Rivas Ordóñez
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO

Alcaldía del Distrito Metropolitano. - Distrito Metropolitano de Quito, 16 de octubre de 2024.

EJECÚTESE:

Pabel Muñoz López
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el señor Pabel Muñoz López, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de octubre de 2024.

Lo certifico. - Distrito Metropolitano de Quito, 16 de octubre de 2024.

Dra. Libia Rivas Ordóñez
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO